

GOBIERNO
SOCIALISTA

12613/44

POLITICA
CAPITALISTA

BASTA!

2083

Archivo Histórico



comisiones obreras de Andalucía

comunista revolucionaria

cuarta internacional

de la isla
necesari-
inhuma-
Direc-
ión con
etes de
a familia de
a para que
que, por ex-
cida, se cele-
atorial. Tan-
se
er-
en
la-
nal-
don
her-
la
de

los demás cooperantes. / Fe...
Schwartz. Director general de la
Oficina de Información Diplomá-
tica. Madrid.

Política 'ética'

Ahí van dos botones de muestra de la política *ética* inaugurada por el socialismo español en el poder:

1. El Gobierno ha decidido que el aumento o actualización de los salarios y las pensiones en 1984 se base en el incremento del coste de la vida previsto para el próximo año, del 8%.

2. El Ayuntamiento de Barcelona, con mayoría socialista, ha decidido aumentar los impuestos en 1984 sobre la base del aumento del coste de la vida en 1983, que de acuerdo con los datos que se poseen alcanzará un 12%.

Sin comentarios. / **Pedro Delgado Ruiz**. Barcelona.

GOBIERNO SOCIALISTA

POLÍTICA CAPITALISTA

BASTA

Liga comunista revolucionaria



HACE un año, "cambio" significó para millones de hombres y mujeres de todo el Estado español, la esperanza de empezar a combatir el paro, de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, asegurar las libertades, salir de la OTAN...: estas ilusiones dieron una victoria electoral aplastante al PSOE.

Pero enseguida pudo comprobarse que "cambio" significaba algo muy diferente para el gobierno socialista. El objetivo fundamental que se dió desde el primer día el gobierno de Felipe González fue **modernizar el capitalismo español**: dicho más precisamente, ayudar a la burguesía española a resolver sus problemas básicos, económicos y políticos: desde la reestructuración industrial a la reforma de la Seguridad Social; desde las contradicciones entre el aparato militar y las instituciones parlamentarias a la debilidad de la centralización política del Estado; desde la entrada en el Mercado Común Europeo a la integración en el dispositivo militar imperialista.

Puede decirse que el **PSOE se ha propuesto realizar una parte sustancial de las tareas que intentó, y en las que fracasó estrepitosamente la UCD**. Pero si las tareas son semejantes, **los métodos son radicalmente diferentes**. El PSOE gobierna con el método típico de la socialdemocracia: apoyarse sistemáticamente en un sector del movimiento obrero organizado. **El gobierno socialista está sentado sobre la UGT**, que constituye su instrumento irremplazable para imponer al movimiento obrero su política económica y social. Los gobiernos de la derecha tenían enfrente, con más o menos fuerza y decisión, al conjunto del movimiento obrero. El gobierno del PSOE cuenta con una tupida red de burócratas dentro de los trabajadores, que busca permanentemente conservar la adhesión de un sector de la clase y dividir al resto. Este apoyo es especialmente importante cuando un gobierno socialista, elegido por los votos de los trabajadores, realiza una política que debe calificarse de **capitalista**.

Esto es el cambio

En el terreno económico-social es donde la política capitalista del Gobierno socialista está siendo aplicada de una manera más clara, más brutal y coherente). Para empezar, los responsables de la política

económica fueron reclutados, en su mayoría, entre tecnócratas con largos y probados historiales de servicios al gran capital. Y los hechos estuvieron a la altura de los historiales. En la negociación del nuevo pacto social, el AI, el gobierno olvidó su promesa de mantener el poder adquisitivo de los salarios y rechazó la petición sindical de decretar la jornada de 40 horas de forma inmediata. Sin sentarse a la mesa de negociaciones, Felipe González no solamente impulsó un nuevo pacto, que continuaba la experiencia negativa de los últimos 5 años, sino que además dió una apreciable ayuda a la patronal, en particular en el tema de la jornada. No iba a ser esta la única vez en que el gobierno aparece en contra de los trabajadores en una negociación colectiva: algunos meses después, en la importante lucha de Banca, abundaron las tomas de posición favorables a la AEB, la patronal bancaria, en cuestiones clave, como la misma jornada partida, pese a que federación de banca de la UGT estaba comprometida en el conflicto.

Las promesas electorales se fueron olvidando. Es cierto que llegó a aprobarse la jornada de 40 horas, pero retrasando su plena efectividad hasta 1984, cediendo a las presiones de la patronal. Y afirmando además el Ministro de Trabajo que las 40 horas son el "techo" de la reducción de la jornada laboral en la legislatura, lo que está en abierta contradicción con todo proyecto serio de creación de empleo. No sorprende por ello, que las promesas en este terreno decrezcan en cada discurso y la realidad sea una continua pérdida de puestos de trabajo.

Pero la prueba de fuego de la modernización del capitalismo español está en la reestructuración industrial. Los gobiernos de la UCD apenas habían avanzado en la tarea. Con el Libro Blanco, el gobierno del PSOE mostró su voluntad de afrontar los sectores industriales en crisis con criterios estrictamente capitalistas, impuestos a los trabajadores con todos los recursos necesarios, Sagunto fue tomando como banco de pruebas de la capacidad de resistencia de los trabajadores; de la posibilidad de enfrentar unas fábricas con otras dentro del mismo sector; de la capacidad de engañar con fantasmales "empleos alternativos" o proyectos de reindustrialización que no existen ni sobre el papel; de la eficacia de la represión patronal y, cuando sea necesario, policial.

Si la prueba de Sagunto es satisfactoria, Solchaga ya tiene preparados, según sus propias palabras, "otros 15 Saguntos más". Así de arrogantes son con los trabajadores estos ejecutivos socialdemócratas, que no se atreven ni a subirles la voz a cualquier miembro de la CEOE.

Pero en fin, hasta aquí, podría concluirse simplemente que el "cambio" no existía, que continuaba el retroceso de los años anteriores: la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el aumento del paro... **La victoria política del 28-O no se había traducido en el terreno económico y social.** Pero los proyectos del gobierno socialista van más lejos, en el futuro aparecen amenazas mucho más graves. Los planes gubernamentales de generaliza-

ción de la contratación temporal y de reforma de la Seguridad Social constituyen verdaderas cargas de profundidad contra conquistas históricas del movimiento obrero: la estabilidad en el empleo, el derecho del trabajador a recibir un seguro digno cuando pierde el trabajo y una pensión suficiente cuando se jubila... Hay que recordar ahora los discursos electorales de Felipe González denunciando las "lacerantes desigualdades" de nuestra sociedad. Si estos proyectos salen adelante, se habrá producido ciertamente una igualación "a la baja" un empobrecimiento de las "capas medias", sin mejora sustancial de la situación de los más pobres y a la vez se profundizará la desigualdad social, y la división entre los trabajadores (con empleo estable, los sometidos a contrato temporal, los parados, subdivididos a su vez en media docena de categorías, los jubilados y pensionistas....).

A las órdenes de la patronal

Toda esta maquinaria de guerra contra el movimiento obrero tiene un objetivo que se afirma públicamente: «puesto que vivimos en una economía de mercado, hay que buscar que funcione lo mejor posible», decían recientemente los representantes del gobierno a una delegación de CC.OO. Dicho de otra manera: se trata de ganar la confianza del gran capital, puesto que ellos, que son los dueños de la economía y del mercado, son los llamados a resolver la crisis, a "reindustrializar", crear empleo, etc. Pero en este terreno, los resultados obtenidos por el gobierno socialista son impresentables. La patronal, naturalmente **ordena el cambio**, en enriquece, **se felicita viendo a un partido de izquierdas que utiliza la confianza recibida de los trabajadores para realizar las más sucias tareas de la salida capitalista a la crisis**. Por el momento no hay hostigamiento al gobierno en el terreno económico, pero tampoco hay, ni habrá colaboración. La patronal no oculta, por ejemplo, su intención de no crear empleo, a pesar de los múltiples y valiosos regalos que le entrega el gobierno. Es lógico: la burguesía conoce muy bien el estado de la crisis capitalista internacional. Cuando Felipe González anuncia que "ya se ve luz al final del túnel", cualquier patrón sabe que esa luz es la del furgón de cola de la próxima recesión, que comenzará dentro de uno o dos años. Y en estas condiciones de ninguna manera van a invertir sus crecientes beneficios en la creación masiva de empleos.

En fin, la política del gobierno socialista de ponerse al servicio del buen funcionamiento de la "economía de mercado", le ha convertido en un excelente instrumento, **a corto plazo**, para el gran capital. Pero, **a medio plazo**, los patronos no consideran instrumentos adecuados a los partidos de la

izquierda, por muy moderados que sean. La experiencia europea de los últimos años es muy clara, y el PSOE debería reflexionar sobre ella, aunque sólo fuera por razones de "autodefensa". La burguesía procura sacar el máximo rendimiento a los regalos que recibe de los gobiernos de la izquierda reformista. Sobre todo, **rentabiliza la división y desmoralización** que estos gobiernos terminan provocando en la clase obrera. Cuando considera que los trabajadores están suficientemente debilitados, pasa a la ofensiva para echar a la socialdemocracia del gobierno y poner en él a sus representantes directos. La política del PSOE de buscar sistemáticamente el apoyo de la burguesía para gobernar, no es solamente reaccionaria: es también suicida.

El gobierno y los trabajadores

En realidad, la fuerza del gobierno del PSOE no depende del apoyo de la burguesía, ni de ninguna de sus instituciones: depende fundamentalmente del apoyo mayoritario de los trabajadores. Con toda su aplastante mayoría parlamentaria, el gobierno de Felipe González tendría enormes dificultades para actuar si contara con una oposición de izquierdas coherente y con una fuerza social significativa. Por eso cuida especialmente la táctica en las relaciones con los trabajadores, con el fin de impedir que esta oposición pueda surgir. Debe hacerlo cada día con más atención porque el capital de confianza, de que dispone se va desgastando lenta y desigualmente. Un año después del 28-0, las condiciones materiales de vida de la inmensa mayoría de los trabajadores han empeorado. Y las agresiones más graves están aún por llegar y van a afectar seriamente a todos los sectores obreros y populares

¿Cómo va a maniobrar el gobierno para conservar pese a todo la mayor parte posible de su base social y para mantener toda oposición dispersa, aislada, marginal...? Pues **en primer lugar**, va a seguir machacando ideológicamente la conciencia de los trabajadores. El insoportable discurso moralista tiene esa función precisa: romper toda solidaridad, debilitar más aún toda conciencia de clase. **En segundo lugar**, se escalonará cada agresión: Así por ejemplo, parece que la reforma de la Seguridad Social se irá haciendo poco a poco, a través de varios decretos-leyes; también, la reestructuración de la siderurgia empezó por Sagunto, y en Sagunto por el tren 28, y la de naval empezará por Euskalduna y Astano..., una vez que Sagunto esté "encarrilado"..., y así en todos los terrenos. Se trata de **ocultar el sentido general de la política del gobierno**, para obstaculizar que surja una respuesta de masas generalizada. Por eso, para contribuir a que esa respuesta aparezca, hay que comenzar desvelando la coherencia anti-obrera de la política del gobierno y criticándola radicalmente, palmo a palmo.

El "escenario" económico: un castillo de naipes

El "escenario" montado por el Gobierno para justificar el retroceso del poder adquisitivo de los salarios, prometiendo la creación de empleo, tiene **inconsistencias y contradicciones tan importantes que lo hacen ilusorio e insostenible.**

Antes de comentarlo conviene resaltar:

a) que, de nuevo, se recurre a ofrecer a los trabajadores empleo a cambio de salarios: un dilema que se ha demostrado falso desde el Pacto de la Moncloa y una alternativa engañosa que mina la combatividad al pretender que los empleados deben mostrar su solidaridad con los parados renunciando a sus salarios.

b) que ya no se trata de crear 800.000 puestos, sino de 690.000, con lo que el Gobierno ha renunciado ya, sin explicación alguna, a 110.000 puestos de los prometidos.

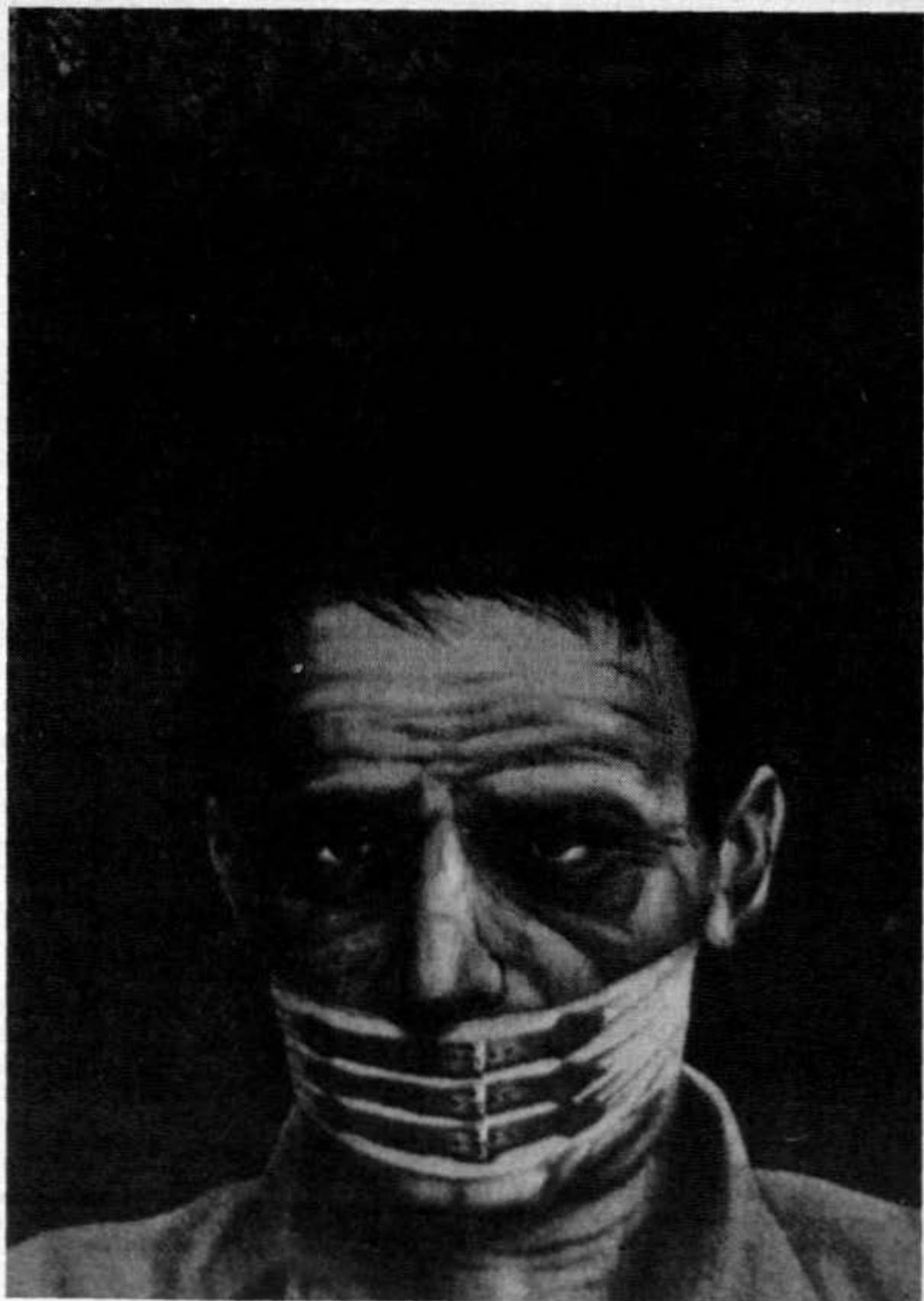
La proyección gubernamental en cuanto al PIB es de unos crecimientos del 2,5; 3,1 y 3,5% en 1984, 1985 y 1986, respectivamente, cuando desde 1978 en ningún año se ha superado el 1,8% y la media del período 1978-83 es del 1,1%.

Sustentando esas previsiones se espera:

a) que las exportaciones crezcan en un 8,5; 7,9 y 8,5% en el trienio próximo. El crecimiento medio del período 1978-83 ha sido del 6,4%, **significativamente inferior al 8,3% de crecimiento medio previsto.** Estos crecimientos suponen una evolución extraordinariamente favorable teniendo en cuenta el proteccionismo creciente y las dificultades financieras de muchos países subdesarrollados que están obligados a cortar sus importaciones.

CECIMIENTO ANUAL

	P.I.B.	Productividad	Inversión	Consumo privado	Exportaciones
1978	1,8	4,3	-6,4	1,3	10,7
1979	0,2	2,5	-1,1	1,2	6,4
1980	1,5	4,9	3,2	1,4	0,6
1981	0,4	3,3	-5,2	-1,3	7,9
1982	1,3	2,4	-1,8	0,4	7,0
1983	1,7	2,4	-0,5	1,1	5,5
1984	2,5	0,8	4,5	0,5	8,5
1985	3,1	0,5	7,8	1,2	7,9
1986	3,5	0,8	7,6	1,7	8,5



Archivo Histórico



comisiones obreras de Andalucía

b) que la inversión crezca en un 4,5; 7,8 y 7,6% (6,6% de promedio), cuando desde 1978 sólo ha habido un año de crecimiento positivo (1979 con un 3,2%), arrojando el período 1978/83 una caída anual media del 2,0%.

Este acusado contraste entre la evolución pasada y la prevista no tiene ninguna justificación.

— Las expectativas empresariales no son favorables. Los patronos lo dejan claro.

— Los tipos de interés, insólitamente altos y sin perspectiva de que desciendan pues la política monetaria será restrictiva, ahogan cualquier proyecto de inversión.

— La inversión pública, que se ha comportado dinámicamente en los últimos cuatro años, ya se ha frenado en 1983 y continuará haciéndolo en 1984, de acuerdo con el Presupuesto.

— Las inversiones energéticas, una parte considerable de las inversiones en los últimos años, tenderán a debilitarse con la revisión a la baja del plan energético.

Por consiguiente, la previsión gubernamental no guarda coherencia con las condiciones imperantes en la economía ni con la propia política del gobierno.

c) que el consumo privado aumente en un 0,5; 1,2 y 1,7%. Estas tasas positivas (1,1% de media en el trienio) no discrepan de la evolución en el pasado 1% de media entre 1978 y 1983. No obstante, es preciso considerar:

— que las reducciones del poder adquisitivo propuestas son mucho más acentuadas que las experimentadas en el pasado. De hecho, el crecimiento previsto del consumo se basa en una evolución del empleo, que, como se verá: es irrealizable.

— que los efectos redistributivos del sector público (pensiones, seguro de paro, subsidios, etc.) pretenden restringirse con la política de austeridad del presupuesto y la reforma de la seguridad social.

Así pues, en mayor o menor grado, la evolución de los componentes fundamentales de la demanda de la economía destruye las previsiones del gobierno sobre el PIB.

Pero, supongamos que el gobierno no se equivoca o no intenta engañar. Para que se creen los 690.000 puestos ahora prometidos, con esos aumentos del PIB, la productividad de la economía tiene que crecer tan sólo en el 0,8; 0,5 y 0,8% en 1984, 85 y 86 respectivamente, ya que si creciera más no podría generarse el empleo que pronostica el gobierno.

Pero, el lento avance de la productividad es una estimación sin base, que el gobierno ha tenido que presentar para poder "justificar" el empleo.

En efecto, esa evolución de la productividad:

— Rompe la trayectoria de los últimos seis años, en los que el avance medio anual ha sido del 3,5%. En esos años, la caída del empleo explica de forma importante ese avance. En los próximos, la destrucción de empleo no

podrá continuar al mismo ritmo, después del ajuste brutal de los años precedentes, pero tampoco la productividad puede avanzar tan lentamente.

— La salida de la crisis, como reiteradamente expresa el gobierno, exige aumentar la productividad, y a esa exigencia responde automáticamente el sistema y se ajusta la política de los patronos y la del gobierno: eliminación de las empresas menos productivas, ajuste de plantillas, flexibilización del mercado de trabajo, inversiones sustitutivas de mano de obra, planes de reconversión... O sea, cuando la batalla por la productividad condiciona toda la política económica socialista, mal puede entenderse que se admita un corte drástico en su avance.

Si se cuestionan, pues, las previsiones sobre el PIB y se descartan las estimaciones sobre la productividad, el menguado compromiso de 690.000 nuevos puestos de trabajo no tiene ninguna justificación. La política del gobierno no sirve para combatir el paro, ya que:

— confiar en las exportaciones es una ingenuidad, por el poco peso que tiene en el capitalismo español, porque todos los países tratan de hacer lo mismo (todos quieren resolver sus problemas aumentando su competitividad y sus exportaciones, para lo que aplican una política de austeridad que reduce los mercados e impide que todos alcancen el objetivo perseguido) y porque el comercio internacional está sometido a las restricciones del proteccionismo y la crisis financiera internacional.

— la reducción del poder adquisitivo de los salarios refuerza la depresión económica al hundir la demanda de los sectores de consumo y al agravar la situación general de sobreproducción.

— la inversión privada no resurgirá a pesar de todos los esfuerzos del gobierno por transvasar la renta de los salarios a los beneficios y por hacer de la fuerza de trabajo una mercancía desechable en cualquier momento. Más aún, la crisis y la incesante búsqueda de la productividad y la competitividad que suscita como respuesta hacen que las inversiones tengan como objetivo esencial sustituir el trabajo por capital.

Frente a la política del gobierno, la creación de empleo exige romper con la austeridad:

— El poder adquisitivo de los salarios tiene que mantenerse como reivindicación social y como algo necesario para sostener la demanda y no destruir empleo.

— Corresponde al gobierno impulsar a través del gasto público la creación directa de puestos de trabajo, pues la iniciativa privada no lo hará.

Una pérdida de poder adquisitivo sin precedentes

El gobierno socialista pretende reducir la inflación desde el 14% de crecimiento del IPC en 1982, hasta el 6% en 1986. Para ello sostiene que el crecimiento de los salarios debe desacelerarse con parecida intensidad y que estos deben sufrir una "pequeña" pérdida de poder adquisitivo durante los próximos años. Se trata, argumenta, de "acortar el diferencial de inflación con los países de la OCDE", para aumentar la competitividad del sistema, y de "reducir los costes laborales de las empresas" para que se creen puestos de trabajo. **Si los planes del gobierno se cumplen, la pérdida de poder adquisitivo no tendrá precedentes por su intensidad y, lejos de favorecerse el aumento del empleo, se provocará la destrucción de más puestos de trabajo.**

El Pacto de la Moncloa inauguró un nuevo sistema para la revisión de los salarios, que ha supuesto una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los mismos. Si hasta entonces las revisiones se efectuaban según hubiera subido el IPC el año anterior, desde entonces, el criterio seguido ha sido el de fijar mediante pactos entre los sindicatos, la patronal y eventualmente el gobierno un aumento no ligado a la inflación pasada, sino con el crecimiento medio que resultaba de la inflación programada para el año siguiente. Bastaba, por tanto, programar una reducción de la inflación no alcanzable para que los salarios perdieran poder adquisitivo, y así ha sucedido en los últimos años.

El PSOE quiere ahora profundizar drásticamente en esta línea y acelerar el proceso de reducción de los salarios reales. En efecto:

a) Ha programado una fuerte reducción de la inflación que probablemente no se cumplirá. En el presente año, el IPC de enero a diciembre puede crecer en un 12%, es decir, dos puntos menos que en 1982, y, apoyándose en esta disminución, el gobierno ha programado aumentos del 8% en 1984, del 7% en 1985 y del 6% en 1986. Pero hay factores que permiten dudar de que la desaceleración pueda ser tan intensa en 1984. En primer lugar, la caída en 1983 tiene su origen fundamentalmente en la evolución de los precios de los alimentos (de enero a julio el IPC se ha elevado en un 5,5%, la alimentación en un 3,6% y el resto en un 6,7%) que no puede continuar en el futuro sin afectar gravemente a las rentas agrarias. En segundo lugar, la depreciación de la peseta y la evolución de los precios de las materias primas están encareciendo considerablemente las importaciones y, esto terminará repercutiendo en el IPC.



LA PERDIDA DE PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS

Porcentajes de crecimiento

	SALARIOS (Convenios colectivos)	IPC		PERDIDA PODER ADQUISITIVO	
		Enero a diciembre	Medio del año	IPC de diciembre año anterior	IPC medio del año
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)-(2) Año ant.	(5) = (1)-(3)
Desde el Pacto de la Moncloa					
1977	25,0	26,4	24,5
1978	20,5	16,5	19,8	-5,9	+0,7
1979	14,1	15,6	15,7	-2,4	-1,6
1980	15,3	15,2	15,5	-0,3	-0,2
1981	13,2	14,4	14,6	-2,0	-1,4
1982	11,5	14,0	14,4	-2,9	-2,9
1983	11,5	12,0	11,5	-2,5	-0,0
			Total.....	-16,0	-5,4
Con el Plan del Gobierno					
1984	6,5	8,0	10,0	-5,5	-3,5
1985	6,5	7,0	7,5	-1,5	-1,0
1986	6,0	6,0	6,5	-1,0	-0,5
			Total.....	-8,0	-5,0

b) El gobierno propone una pérdida de poder adquisitivo del 1,5% en 1984 (8% del IPC menos 6,5% de salarios), pero está haciendo una trampa. Hasta ahora, el criterio de la inflación programada se refería a las medias anuales, es decir, el crecimiento medio de los salarios debe compararse con el crecimiento medio de la inflación. Pues bien, si este año va a terminar con un crecimiento del IPC del 12% y el gobierno programa un 8% para 1984, el crecimiento medio del IPC entre 1983 y 1984 será del 10%. Por tanto, el crecimiento del 6,5% de los salarios en 1984 supondría una pérdida del 1,5% como dice el gobierno, sino del 3,5%. Una pérdida del poder adquisitivo tan intensa no se ha programado nunca, aún con los criterios de la inflación programada (sobre el 12% en que acabará este año el IPC, la pérdida de poder adquisitivo sería del 5,5%).

c) Los salarios netos que perciban los trabajadores no crecerán el 6,5%, sino un porcentaje menor, como consecuencia del aumento de las re-

tenciones del IRPF que el gobierno ha de decretar según el presupuesto de 1984. En 1983 el gobierno socialista ya elevó en más de un punto dichas retenciones y algo parecido ocurrirá en 1984, con lo que la pérdida de poder adquisitivo será superior al 4,5% sobre la inflación programada.

d) El crecimiento del 6,5% no debe tener en opinión del gobierno una aplicación general, ya que en las empresas públicas y en los sectores en reconversión los aumentos salariales deben tomar en consideración la situación financiera y de rentabilidad de las empresas.

El argumento que el gobierno utiliza para defender esta política es que es necesario reducir los costes laborales para que los empresarios se sientan estimulados a crear empleo. Pero esto es falso. Lo ha sido hasta ahora, porque **mientras los salarios desde el Pacto de la Moncloa hasta este año han perdido el 16% de poder adquisitivo** sobre el nivel que tendrían si se hubieran elevado según el IPC del año precedente, o el 5,4% sobre el nivel que tendrían si se hubieran revisado según el IPC medio de cada año, **el empleo asalariado se ha reducido en 977.000 puestos de trabajo**. Y lo será en el futuro, porque una pérdida del poder adquisitivo tan intensa contribuirá a mantener deprimida la economía.

Una política del sector público antiobrera

Lejos queda el tiempo en que el PSOE en la oposición debe preeminencia a la lucha contra el paro frente al problema de la inflación y preconizaba la utilización del sector público para crear empleo. Una vez en el poder, para el gobierno socialista, la reducción del déficit público se ha convertido en un objetivo central de su política, acomodándose a las presiones que en este campo ejerce la patronal. **Los capitalistas, después de haber logrado machacar los salarios directos, encuentran que para elevar la tasa de beneficio es preciso también reducir los gastos y las prestaciones sociales del sector público**, que constituyen el salario indirecto de los trabajadores. El combate contra el déficit público de la patronal tiene ese fin fundamental. El gobierno ha hecho suya tal directriz, y a ella responde la reforma de la seguridad social que se anuncia y el contenido del presupuesto para 1984 y los avances para los años siguientes.

La Seguridad Social concebida como caridad pública

El gobierno, sin más punto de referencia que los criterios capitalistas, encuentra que los derechos que genera el sistema actual de la seguridad social y la inevitable protección social que ha de desplegarse para amortiguar las secuelas de la crisis no pueden ser "sostenidas" por el Estado. De ahí que tenga proyectado modificar sustancialmente y de forma muy regresiva el

sistema de la seguridad social hasta el punto de convertir a los jubilados o parados en perceptores de una protección de subsistencia. De trabajadores con derechos se pretende que pasen a personas cubiertas por la caridad del Estado.

La ofensiva del gobierno contra la seguridad social es un atentado a una de las mayores conquistas sociales de los trabajadores y traspasa los límites de lo imaginable en un gobierno que no renuncia a autocalificarse de socialista. Del proyecto de una gran ley marco para llevar a cabo la reforma, que originaría una gran resistencia, el gobierno ha modificado su táctica, pretendiendo llevarla a cabo a través de pasos escalonados, con cinco o seis leyes sucesivas, que encuentren menos resistencia entre los trabajadores. Sus objetivos no se han hecho formalmente explícitos, pero de la reforma se sabe lo siguiente:

a) Que se establecerán tramos o categorías en las pensiones. La seguridad social sólo cubrirá las pensiones mínimas que, como se sabe, son mínimas de verdad. Las pensiones que traspasen este ínfimo nivel, pero sin sobrepasar un límite, que sería una segunda categoría se generarán como consecuencia de cotizaciones especiales de los trabajadores. Por último, aquellos trabajadores que quieran garantizarse una jubilación no miserable tendrán que contratar con empresas privadas una pensión. **Se trata nada menos que de privatizar parte de la seguridad social**, convirtiendo en un negocio particular la seguridad económica de los trabajadores en el tramo final de sus vidas.

b) Que se modificarán las normas por las que se determinan actualmente las pensiones, **prolongando acusadamente** el período de cotización que se considera para estimar la base de la pensión, para, de ese modo, bajarlas. Las disposiciones que se adoptaron en el presupuesto de 1983 y las del presupuesto de 1984, congelando algunas pensiones y fijando crecimientos inversamente proporcionales a su cuantía, así como el anuncio de que la pensión máxima se fijará en 70.000 pesetas (lo mismo que la prestación máxima del seguro de paro en 45.000 pesetas), se ajustan y avanzan en los proyectos del gobierno.

c) Que se descargará a los empresarios en sus obligaciones de cotizar instruyéndose esa financiación por aportación de fondos del presupuesto del Estado. Tras varios años de ocurrir lo mismo, en 1983, el tipo general de los empresarios se bajó en 1,5 puntos. En 1984 se reducirá otra vez esa cifra, aumentándose en 0,5 puntos el tipo de cotización por desempleo. La contrapartida a esta reducción es que el estado tiene que financiar crecientemente a la seguridad social (627.000 millones en 1984 con un incremento del 29%) con unos ingresos recabados regresivamente de todos los contribuyentes. Es decir, **se descarga la presión fiscal de las empresas a costa, primordialmente de los trabajadores**. Primordialmente, aunque no sólo, porque también se están elevando las cotizaciones de los trabajadores autónomos.

(40% en 1984) y las del régimen agrario (43% en 1984).

Es importante resaltar un aspecto del modo en que se trata de soslayar la resistencia social y de encubrir lo reaccionario de la política del gobierno en lo que atañe a la reforma de la seguridad social, y en general a toda la política del gobierno: **el peso de las medidas se descarga sobre los estratos medios de la población, que son los que pueden aguantar las agresiones sin llegar a "explotar" por la desesperación.** En este sentido, la política se dirige a depauperizar a las amplias masas de la población cuyo nivel de vida sobrepasa los límites de la subsistencia.

Un presupuesto contra los trabajadores

Estos criterios se detectan en el Presupuesto para 1984, tanto en los gastos (retribuciones de funcionarios y pensiones) como en los ingresos, con un acentuado aumento de la presión fiscal sobre las rentas medias del trabajo. El gobierno no puede realizar tan rápida y drásticamente la contrarreforma del gasto público como quiere la patronal pero, como compensación, el aumento de los ingresos públicos para sufragar los gastos no se detrae de los beneficios y las rentas altas sino de las rentas del trabajo y el consumo.

DESDE el punto de vista de los ingresos públicos, el Presupuesto para 1984 se caracteriza:

a) **Por un fuerte avance de la presión fiscal concentrado sobre las rentas del trabajo** y los impuestos sobre el consumo, que reducirá significativamente el poder adquisitivo de los salarios.

b) **Por nuevas medidas para favorecer los beneficios de las empresas.**

En efecto:

— Frente al crecimiento de los salarios pretendido por el Gobierno, en torno al 6,5%, los impuestos se elevarán en un 25%. Los impuestos directos lo harán en un 25,4%, pero mientras los que gravan la renta de las personas físicas se incrementarán en un 30% (fundamentalmente rentas del trabajo, cuyas retenciones suponen más del 80% de la renta de las personas físicas y más del 65% de los impuestos directos), los que gravan la renta de sociedades sólo aumentarán en un 10%. Los tipos de las retenciones por el IRPF aumentará desde el comienzo del año en varios puntos, que deben descontarse del incremento salarial. Por otra parte, la progresividad de los tipos del impuesto sobre la renta no se modifica (si acaso negativamente), pero en cambio se elimina la reducción en la cuota del 1% de las rentas del trabajo superiores al millón anual.

— Los impuestos indirectos, en general bastante regresivos, experimentarán un aumento del 24%. El ITE en un 36%, después de un crecimiento medio en el último trienio de más del 31%. Los impuestos derivados del consumo de gasolina subirán más del 30%. (Estas subidas incidirán en la inflación, lo que hace más improbable la previsión del 8%).

— Los impuestos y tasas municipales, también muy regresivos, tendrán que experimentar altos crecimientos para compensar los recortes que las Corporaciones Locales van a sufrir en la financiación que reciben del Estado. (Reducción del 8 al 7,2% en la participación de los ingresos estatales y ruptura del compromiso de correr el Estado con la totalidad de los déficit de las Corporaciones Locales).

El aumento regresivo de la presión fiscal se ha acompañado por parte del gobierno de un reconocimiento de la enorme entidad que tiene el fraude fiscal. Un billón estimaba Boyer, es decir, casi tanto como la recaudación por los impuestos directos, pero es evidente que no hay voluntad política de combatirlo. Cualquier intento de hacerlo desencadenaría una reacción de la derecha y los empresarios, uno de cuyos aspectos sería una toma de posición clara frente a las expectativas de inversión del gobierno, lo que socavaría la credibilidad ya maltrecha de los planes económicos de este. **En última instancia, cabe preguntarse: ¿por qué luchar contra el fraude fiscal, que realizan fundamentalmente las empresas y los grandes rentistas, si es preciso aumentar los beneficios?**

PASEMOS a los gastos. El Presupuesto de 1983 se juzgó como de transición, es decir, en el no pudo reflejarse todavía la orientación económica socialista. En el de 1984 quedan relegadas definitivamente las promesas electoral y quizás por ello se califica de socialista.

— Se había prometido garantizar el poder adquisitivo de todos los trabajadores, pero se fija un aumento del 6,5% para los funcionarios. A más de un millón de trabajadores se les impone una decisión unilateral y arbitraria del gobierno.

— Se iban a actualizar automáticamente las pensiones, para evitar la manipulación política de los pensionistas y sus necesidades, y a garantizar el poder adquisitivo, pero, frente al incremento del IPC en 1983, que será próximo al 12%, la subida media de las pensiones es del 8%.

— Se impulsaría la inversión pública para crear empleo, pero **el crecimiento de la inversión pública será el más bajo de los últimos cuatro años.** Un 4,5% en 1984 cuando en 1981 y en 1982 fue del 14%.

Las dos cuestiones fundamentales para los trabajadores, el poder adquisitivo y el empleo, quedan de este modo descuidadas en el Presupuesto y burladas las promesas electorales. A pesar de ello, el gobierno no renuncia a reconocerle un carácter social. Ni a pesar de estos otros datos:



AUMENTO DE GASTOS

M° de Defensa 15,6%
M° de Educación 5,4%
M° de Cultura 7,9%

Clases pasivas 7,3%
Asistencia sanitaria (Seg. Soc.) 9,7%
Servicios Sociales (Seg. Soc.) 7,6%

¿Dónde quedaron las promesas sobre el empleo?

El PSOE prometió en las elecciones la creación de 800.000 puestos de trabajo durante los cuatro años de su mandato, pero ahora la cifra se ha quedado reducida a 690.000. Sin embargo, ni siquiera esto se cumplirá y el gobierno lo tiene que saber.

LA CAIDA DEL EMPLEO Y EL AUMENTO DEL PARO DESDE EL PACTO DE LA MONCLOA

(Miles de personas y porcentajes)

	1977 IV Trimestre	1983 I Trimestre	Variación	
			Miles de personas	Porcentaje
Energía y agua	155	147	-8	-5,2
Minería no energética	240	196	-44	-18,3
Química	183	164	-19	-10,4
Metal	1.019	838	-181	-17,8
Alimentación	358	287	-71	-19,8
Textil y Calzado	526	421	-105	-20,0
Madera y otros	523	392	-131	-25,0
Construcción	1035	684	-351	-33,9
Transportes	409	373	-36	-8,8
Comunicaciones	93	109	+16	+17,2
Total trabajadores productivos	4541	3611	-930	-20,5
Agricultura	711	586	-125	-17,6
Servicios	2369	2224	-145	-0,6
AA.PP. Administración Pública	914	1073	+159	+17,4
Total asalariados	8535	7494	-1041	-12,2
No asalariados	3573	3179	-394	-11,0
Total ocupados	12.108	10.673	-1.435	-11,9
Parados	751	2320	1569	+208,9
Activos marginales	113	75	-38	-33,6
TOTAL POBLACION ACTIVA	12972	13068	96	+0,07

Nota: Los datos del presente cuadro se refieren al período comprendido desde el IV Trimestre de 1977 hasta el I Trimestre de 1983. En el texto se ha utilizado en unas ocasiones 1977-IV Trimestre a 1982-II Trimestre, y en otras 1980 a 1982 o 1979 a 1982, pero en todos los casos se ha incluido el II Trimestre de este año. No ha sido posible completar el presente cuadro con los datos del II Trimestre, por lo que no coinciden con los del texto, pero por su interés hemos considerado conveniente publicarlos.

En el cuatrienio 1979-82, el empleo se ha reducido en 1.063.000 puestos de trabajo, un 2,4% de media anual al año, como resultado, por una parte, de que la productividad por persona creció el 3,3% y, por otra, de que el PIB lo hizo el 0,9% de media al año. Si lo que produce cada trabajador aumenta más que lo que hace la producción total, la consecuencia no puede ser otra que para producir lo mismo los capitalistas necesitan menos trabajadores y que, por lo tanto, reduzcan los puestos de trabajo.

Como el gobierno ha hecho una promesa y, por otra parte, debe ofrecer algo a cambio de los sacrificios que les pide a los trabajadores, fuerza los datos para presentar una creación neta del empleo. Para ello supone que el PIB crecerá como media en el cuatrienio 1983-86 el 2,7%, lo que como hemos visto es bastante improbable, y que el crecimiento de la productividad descenderá desde el 3,3% del período 1979-82 hasta el 0,7% en los cuatro años de su mandato! Esto podría ser posible con una política decidida de creación directa de puestos de trabajo, mediante la puesta en práctica de un programa de inversiones públicas y ampliación de los servicios sociales, pero no es esto lo que se propone hacer el PSOE. El gobierno se limitará a instrumentar una política destinada a inducir al capital privado a crear los puestos de trabajo correspondientes (él, por su parte, ya piensa reducirlos con la reestructuración de las empresas públicas), y para que los capitalistas generen 690.000 nuevos puestos de trabajo en el cuatrienio, ¡espera que detengan el crecimiento de la productividad, que es una fuente fundamental de sus beneficios! El gobierno sabe que esto no ocurrirá y que es incongruente con su política, pero necesita presentárselo así a los trabajadores.

En efecto, si partimos del incremento previsto del PIB y si suponemos que el crecimiento de la productividad, aún reduciéndose fuera del 2% en cada uno de los cuatro años, la generación de puestos de trabajo sería solo de 130.000. Pero si admitimos más realísticamente que el PIB no crecerá tanto como dice el gobierno, **durante el período de mandato socialista el empleo seguirá reduciéndose**. De hecho, en 1973, el PIB sólo crecerá en un 1,7% y la productividad puede superar el 2%, de modo que para el conjunto del año se perderán unas 100.000 empleos, de los que 42.000 ya se han destruido en el primer semestre.

LAS CUENTAS DEL EMPLEO

	% CRECIMIENTO MEDIO DE			PERSONAS EN EL PERIODO		
	PIB	Productiv	Empleo	VARIACION DEL EMPLEO	AUMENTO POBLACION ACTIVA	AUMENTO DEL PARO
	(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)
1979-82	0,9	3,3	-2,4	-1.063.000	173.000	1.236.000
1983-86 (Plan Gobierno)	2,7	0,7	2,0	690.000	405.000	-285.000
1983-86 (hipótesis realistas)	2,7	2,4	0,3	130.000	405.000	275.000
	2,0	2,4	-0,4	-172.000	405.000	577.000

Prosiguiendo con las estimaciones del gobierno, si creara esos 690.000 puestos de trabajo, el paro sólo se reduciría en 285.000, porque el resto, 405.000, es la cifra que se prevé que crecerá la población activa, una estimación optimista de acuerdo con la tendencia a una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo que se ha producido en los últimos años. Si la productividad crece el 2% y los puestos de trabajo creados son 130.000, el aumento del paro sería de 275.000 y si el PIB no crece como preve el gobierno y el empleo se reduce en 172.000 personas, el paro aumentaría en los cuatro años de gobierno socialista en 577.000. (Para crear los 405.000 puestos de trabajo y por lo tanto, para que el paro no crezca, es preciso que el empleo aumente como media cada año el 0,9%, por lo que el PIB debe crecer en ese porcentaje por encima de lo que lo haga la productividad; esto no ha ocurrido nunca desde que se inició la crisis y ahora, con el plan del gobierno, tampoco ocurrirá).

¿Y las medidas sobre el reparto del trabajo?

Dadas la gravedad de la crisis económica y la importancia del avance tecnológico, una de cuyas características es la sustitución de hombres por máquinas, **no hay ninguna solución al problema del paro que no pase por una reducción drástica de la jornada laboral.** El gobierno socialista, incumpliendo otra vez sus promesas electorales de reducir la jornada laboral inmediatamente a las 40 horas en la perspectiva de las 35, ha empezado mal, pues la ley sobre las 40 horas deja suficientes escapes a la patronal para que la jornada continúe siendo superior en muchos sectores, (computo anual, basado en el "trabajo efectivo", esto es, descontando el tiempo del bocadillo, etc.) y continuará peor, pues ya ha dicho el Ministro Almunia que esta será la jornada hasta el fin de la legislatura.

La jubilación a los 60 años es otra de las promesas incumplidas. El gobierno parece haber olvidado a "nuestros viejos", como dijera sentimentalmente Felipe González. En la actualidad se encuentran trabajando 639.000 personas con edades comprendidas entre los 60 y los 64 años y 235.000 con 65 y más años, lo que supone el 8% del empleo total de la economía. Sería, pues, bastante importante el número de puestos de trabajo que podrían crearse si se estableciera la jubilación a los 64 años con el contrato de relevo, pero nada de esto existe en los planes del PSOE.

¡A por el despido libre!

El gobierno socialista sigue una política que no creará empleo. No obstante entre sus objetivos está el de "flexibilizar" el mercado de trabajo.

Como si un 20% de caída del empleo asalariado desde el Pacto de la Moncloa no mostrara palpablemente la flexibilidad que encuentran los capitalistas a la hora de hacer despidos, **el gobierno quiere aumentar la precariedad en el empleo y avanzar resueltamente hacia el despido libre mediante la generalización de los contratos temporales, a tiempo parcial y especiales.**

Este tipo de contratos fueron regulados por UCD mediante un Real Decreto de junio de 1982 que refundió todas las normas en vigor. El PSOE no lo ha derogado y no ha prohibido el trabajo precario, como debería esperarse de un gobierno que se ha encumbrado con el voto de los trabajadores, sino que lo ha modificado para hacerlo menos restrictivo. Ahora pretende suprimir cualquier limitación a la contratación temporal y entre sus objetivos está la reforma del Título I del Estatuto de los Trabajadores, justamente en el sentido contrario al que debiera: trata de que los reajustes de plantilla puedan realizarse más fácilmente y con menor coste.

Antes UCD y ahora el PSOE tratan de justificar esta concesión a la patronal y este ataque a los trabajadores como una medida destinada a facilitar la creación de empleo. Nada más falso. Dada la crisis económica y la sustitución de hombres por máquinas que favorecen las nuevas tecnologías, la creación de un puesto de trabajo no depende de que el contrato sea fijo o temporal, sino de que la economía reanude su pulso y la producción vuelva a crecer, o de que el gobierno lo cree directamente mediante la puesta en práctica de un plan de inversiones públicas. **En contra de las declaraciones de Almunia y Boyer, la contratación temporal libre supone el despido libre para los nuevos contratados y estimula la paulatina sustitución de los trabajadores fijos por otros con contratos temporales, introduciendo una inseguridad insufrible en los trabajadores que estén sometidos a los mismos y, desde el punto de vista de la clase obrera y sus organizaciones, son un factor de descomposición imponderable,** pues los trabajadores con contratos temporales se lo pensarán dos veces a la hora de sindicarse o hacer una huelga, por miedo a perder el empleo al final del período de vigencia de su contrato.

Con los contratos a tiempo parcial o los especiales pasa otro tanto. En situaciones de auge pueden servir para que un estudiante, por ejemplo, obtenga algunos ingresos que en caso contrario no percibiría por la imposibilidad de realizar una jornada completa. **Pero en momentos de crisis y de aumento del paro suponen crear las condiciones para una sobreexplotación,** pues se traducen en la contratación a tiempo parcial de trabajos en horas punta o penosas que, sin este tipo de contratos, hubieran supuesto la creación de un puesto de trabajo permanente a jornada completa.

En resumen, la flexibilización del mercado de trabajo no supondrá la creación de empleo y, por el contrario, es una agresión gravísima para la clase trabajadora que, con las medidas que pretende el gobierno socialista,

puede ver como se esfuma definitivamente una de sus conquistas históricas: la seguridad en el puesto de trabajo.

Los parados seguirán sin seguro

De los 2.320.000 parados que había en el mes de marzo, sólo 484.000 percibían la prestación básica de desempleo y otros 112.000 la complementaria, es decir, nada más que el 26% de los parados estaban protegidos por prestaciones económicas. Simplemente un año antes, la tasa de cobertura del paro con el subsidio de desempleo era del 34%, y a principios de 1981, antes por lo tanto de que se aprobaran los recortes introducidos por la LBE, era del 45%. El PSOE prometió en las elecciones reformar limitadamente dicha ley, ampliando los plazos de percepción del seguro, pero ahora lo que pretende hacer es una chapuza: quiere aumentar la cobertura del número de parados no aumentando significativamente los fondos que actualmente se destinan al seguro de desempleo, sino reduciendo las prestaciones más elevadas hasta un máximo de 45.000 pesetas. Huelga decir que una "lacra" como el paro, de la que no tienen la culpa los trabajadores, debe combatirse creando puestos de trabajo, pero mientras esto no ocurra, es obligación de un gobierno socialista, que se encumbró precisamente con sus votos, instrumentar un subsidio de desempleo para todos los parados y por un importe digno. El gobierno socialista, desde luego, no tiene intención de hacerlo.

Las reestructuraciones y el Libro Blanco

El Gobierno socialista se ha dado como objetivo el de modernizar el capitalismo español y hacerle más competitivo y, para ello, piensa acometer con decisión la reconversión industrial, cuyas líneas generales se encuentran en el Libro Blanco. El marco diseñado en el mismo responde a criterios capitalistas y está concebido con una interpretación tan grotesca de la solidaridad que, mientras para los patronos reclama que "las empresas que reciban subvenciones públicas deberán comprometerse a seguir las directrices marcadas con el órgano rector del plan", para los trabajadores exige: "realizar los ajustes de empleo con carácter inmediato" y "aplicar una política salarial estricta durante la reconversión".

La filosofía de la política de reconversión del gobierno socialista en nada difiere de la de la última fase de UCD y, de hecho, el mecanismo para ponerla en marcha es similar al que ya se empleó en ACERIALES y es el siguiente:

— Los sindicatos, la patronal o ambos solicitan la reconversión de un

sector. En casos excepcionales, esta puede iniciarse por iniciativa del Gobierno.

— Se constituye un órgano Gestor encargado de diseñar el plan de reconversión en el que deben estar de acuerdo todas las partes. En caso de que no se llegue a un acuerdo, el gobierno puede imponer la reconversión por decreto. Esto es lo que ha ocurrido en Sagunto.

— Se crea una Sociedad de Reconversión, que será la encargada de gestionar la misma. Dicha sociedad tendrá como accionistas a las empresas del sector y excepcionalmente a la Administración. Los sindicatos no intervienen en ella y su única participación se limita a la fase precedente, es decir, a la elaboración y aprobación del plan. Esta sociedad será la encargada de distribuir los fondos de ayuda, gestionar la reconversión, etc.

— El plan de reconversión debe prever los "excedentes de empleo" y para ello se mantienen las medidas tradicionales (expedientes de regulación de empleo, jubilaciones anticipadas, etc.) **aunque se modificarán regresivamente**, y se crea la figura de los Fondos de Promoción de Empleo; todos los trabajadores que hayan visto rescindido su contrato de trabajo podrán formar parte del mismo, aportando la indemnización por despido.

La política de reconversión del gobierno socialista contenida en el libro blanco se basa en un estricto respeto de los mecanismos del sistema capitalista; no tiene ninguna medida progresiva reseñable; pretende confundir y desarmar a los trabajadores con las entelequias del interés nacional y de la necesidad de los sacrificios compartidos para salir de la crisis; supone que el gobierno socialista está dispuesto a hacer lo fundamental del trabajo sucio que los anteriores gobiernos burgueses no han podido hacer y sus efectos serán los siguientes:

a) **Supondrá un descenso brutal del empleo** en los sectores y empresas afectados (electrodomésticos, aceriales, siderurgia integral, textil, equipo electrónico de automoción, construcción naval, semitransformados del cobre, componentes electrónicos, acero común, calzado y forja pesada y empresas como General Eléctrica, Westinghouse, Talbot, Asturiana del Zinc, Grupo Standard). Para estos once sectores y empresas afectados **puede suponer más del 20% de la plantilla y alcanzar por las repercusiones indirectas a 200.000 trabajadores.**

b) Las reducciones de empleo en los sectores y empresas en reconversión se llevarán a cabo a través de jubilaciones anticipadas y por medio de bajas incentivadas pero modificando las condiciones actuales: **las bajas serán definitivas** y no rescisiones temporales de contratos, y se empeoran sensiblemente las condiciones de jubilación anticipada.

c) Los Fondos de Promoción de empleo, a los que se aportarían las indemnizaciones por despido, **son una fórmula para facilitar la reconversión creando falsas expectativas de recolocación, ya que el plan del gobierno ni contempla ni se compromete en la creación de puestos de trabajo alternativos.** Respecto al caso de Aceriales se empeoran las

condiciones, ya que el contrato laboral se extingue y se financian también con aportaciones de los trabajadores con empleo del sector. Además, los trabajadores afectados sufrirán una congelación de retribuciones que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo, durante los 33 meses en que se puede estar en el fondo, no inferior al 25%, oscilando los ingresos reales en relación a los de los trabajadores activos entre el 50% y el 70%, no hay ninguna garantía de recolocación al final, encontrándose el trabajador. Por último que no haya obtenido empleo con que su contrato se ha extinguido.

d) En las sociedades que se crean para la reconversión, ni los trabajadores ni los sindicatos tendrán participación alguna en el control y gestión de su actividad, a pesar de las ayudas públicas que reciban.

En cuanto a los capitalistas, todo son beneficios. Obtienen financiación del Estado a través de subvenciones a fondo perdido, tipos de interés más bajos en los créditos, créditos y avales oficiales, etc. No hay nada especificado en el libro blanco sobre compromisos del capital privado en las reconversiones, salvo la posibilidad de establecer coeficientes obligatorios a la Banca. Pero teniendo en cuenta la renuncia de los banqueros, la única forma de obtener los fondos necesarios para hacer una reconversión e iniciar un proceso efectivo de reindustrialización que cree nuevos puestos de trabajo, es la de la nacionalización de la Banca. Por otra parte, una vez lograda la reducción de plantillas, en modo alguno el gobierno está en condiciones de hacer cumplir las inversiones necesarias para la reindustrialización, lo que convierte al proyecto del gobierno en una aventura en la que los únicos datos ciertos es que se empieza destruyendo miles de puestos de trabajo y desmantelando industrias y sectores completos. Una condición indispensable para la reindustrialización es la nacionalización de los sectores en reconversión antes de proceder a la misma pero, evidentemente, el PSOE no está pensando en ello.

El gobierno socialista para cumplir sus planes de reconversión, compartimentará y dividirá a los trabajadores (como hemos visto en el caso de la siderurgia integral y podemos ver en el de la construcción naval). Este es un riesgo que hay que evitar por todos los medios, y tomar conciencia de ello es tanto más necesario cuanto que la desesperación de las luchas propicia la insolidaridad y el enfrentamiento de los trabajadores. Hay que detener los planes de reestructuración del gobierno, pues tras los despidos no puede quedar esperanza de un puesto de trabajo alternativo. Para ello, la solidaridad con las luchas de los sectores afectados, es más importante que nunca.

¿Qué hacen los sindicatos?

En la tarea de dar respuesta, poner freno al curso derechista y antiobrero de la política gubernamental, para exigir al gobierno que deje de actuar como

un rehén de la patronal y responda, de una vez, a las aspiraciones de quienes le votaron, corresponde un papel fundamental a las grandes centrales sindicales. Pero, ¿cuál es el papel real que están desempeñando UGT y CC.OO.?

UGT: Las contradicciones de una "correa de transmisión"

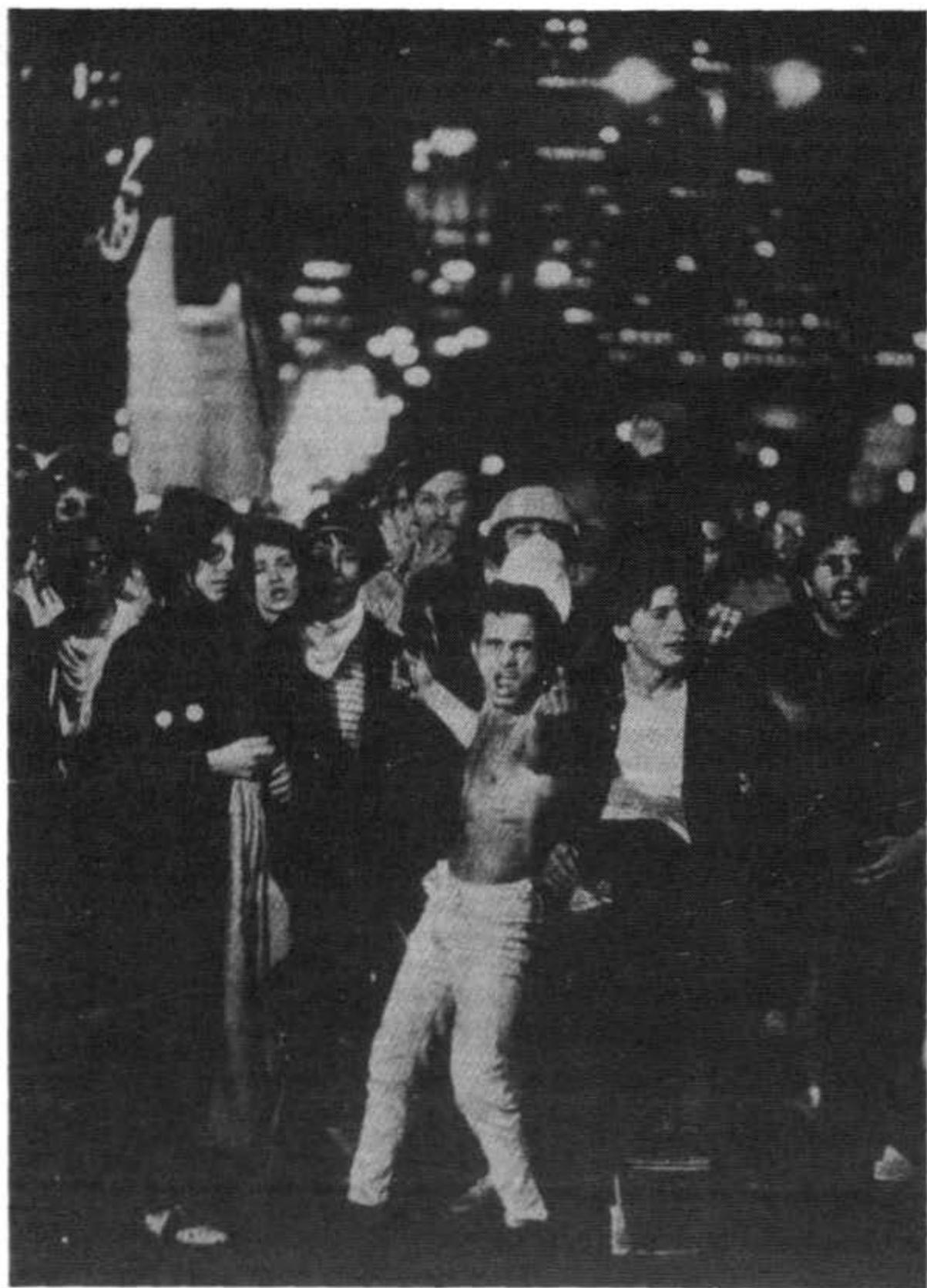
Con UGT no hay duda posible. La dirección ugetista fue la inspiradora y el principal apoyo del giro a la derecha del PSOE desde los años 78-79. Redondo descubrió entonces el lema que ha orientado todo su trabajo, hasta la fecha: "en época de crisis económica, no sirve el sindicalismo de movilización, sino el de concertación". Los "servicios" que este tipo de sindicalismo ha rendido a la clase obrera, están claros en el balance desastroso de los pactos, sin excepción. Si a pesar de ello, UGT ha avanzado de un modo impresionante en el movimiento ha sido, sobre todo, gracias a contar con un aliado poco reconocido: la dirección de CC.OO. cuya debilidad, falta de decisión y coraje para impulsar la lucha, cuya adaptación de hecho a la línea de la UGT desde finales de 1979, le ha quitado toda credibilidad como alternativa de movilización.

Naturalmente, después del 28-O, la dirección ha profundizado más aún en su línea, y en el 33º Congreso preparó al sindicato para cumplir la función que realmente le corresponde en la estrategia socialdemócrata: **ser los capataces del "cambio" dentro del movimiento obrero.** Pero la burocracia ugetista no tiene el trabajo fácil...

Posiblemente sea en la base de la UGT donde más ilusiones ha despertado el cambio. En cierto modo, las reivindicaciones moderadamente progresistas que suelen recoger, incluso recientemente, los programas de la UGT (por ejemplo, las 38 horas y el 75% de cobertura del desempleo para 1986...), tratan de responder a ellas. Pero la práctica del gobierno socialista deja cada vez menos ilusiones en pie. Los trabajadores ugetistas de Banca, hace algunos meses, los de Sagunto ahora mismo..., sufren sin duda una desilusión que puede producir reacciones positivas.

Por más buena voluntad que tenga la dirección de UGT de ser la correa de transmisión de la política gubernamental, tiene también que conservar su autoridad en la base del sindicato, conseguir ciertas concesiones del gobierno, afirmar su propio papel ante él. La "bronca" que Redondo propinó al gobierno a principios de Agosto se resolvió enseguida, con una propina insignificante en los Presupuestos del Estado. Este pequeño episodio anuncia problemas que pueden ser más importantes en los próximos meses: el gobierno va más allá incluso de lo que puede tolerar y apoyar una burocracia tan servil como la de UGT.

Pero los problemas más importantes no van a estar entre gobierno y direc-



ción de UGT, sino dentro de la propia central: es bueno que estos problemas crezcan, que haya militantes ugetistas que se rebelen para evitar que su sindicato sea un dócil instrumento de agresiones tan graves como las que ha puesto en marcha el gobierno del PSOE. Para frenar estas agresiones, lo que ocurre dentro de la UGT tiene una importancia considerable.

CC.OO.: Un "giro a la izquierda" nada fiable

Desde el 28-O, se ha anunciado muchas veces que CC.OO. "giraba" a la izquierda. Lo cierto es que, a pesar de la necesidad cada vez más urgente que el sindicato tiene de encontrar un espacio propio y claro a la izquierda de UGT, todos los anuncios han resultado falsos. La razón es conocida: la dirección de CC.OO. ha pretendido situarse a la izquierda de UGT, sin poner en cuestión su línea y trayectoria de los últimos años. Así el "giro" no ha ido más allá de los discursos.

La pasada negociación del AI fue un excelente ejemplo: se hizo verbalismo "de izquierdas" hasta el minuto antes de firmar; finalmente, se firmó un pacto tan rechazable como todos los anteriores; y después se hicieron todas las maniobras burocráticas posibles para obstaculizar un debate democrático dentro de la central, cuyo resultado podría haber sido el rechazo mayoritario de la firma (como se recordará, incluso en estas condiciones, unos 10.000 delegados de CC.OO. se opusieron a ella).

Ahora la situación obligaba a endurecer posiciones. El balance del AI es indefendible. La política del gobierno deja un margen muy reducido para la concertación. En fin, incluso la dirección de CC.OO. ha comprendido que existe un malestar creciente entre los trabajadores sobre la experiencia del "cambio", al que hay que ofrecer una respuesta. Entonces, ¿se hará esta vez realmente el giro a la izquierda? Pues tanto por la experiencia pasada, como por lo que dicen y hacen ahora los portavoces de la dirección de CC.OO., hay que mantener **una desconfianza radical**.

En primer lugar, parece que el caballo de batalla elegido por Camacho es, por enésima vez, el Plan de Solidaridad Nacional (**PSN**), de triste memoria. Este hecho sería ya más que suficiente para justificar la desconfianza. Como se recordará, este "plan" es un compendio de filosofía y propuestas prácticas de "consenso", que pretendía resolver el problema del paro, formulando objetivos "aceptables" por la patronal. Su única utilidad práctica ha sido desorientar a los militantes de CC.OO., y a los trabajadores en general, sobre la cuestión fundamental de cómo luchar contra el paro, cómo defender el puesto de trabajo.

Todo lo que se ha hecho desde CC.OO. con un sentido progresivo, de defensa de los trabajadores, no tiene nada que ver con el PSN: por poner ejemplos recientes, la marcha por la Reforma Agraria o la lucha de la sección

sindical de CC.OO. de Altos Hornos del Mediterráneo, está en las antípodas de la llamada "solidaridad nacional". Y todo lo peor que se ha hecho desde CC.OO. sigue el ejemplo del PSN: por ejemplo, en el convenio de Banca, o en Unión de Explosivos Río Tinto. Un centímetro que se mueva hacia la izquierda CC.OO., será alejándose del PSN y contra él.

Pero lo que importa de verdad es la práctica, esa será la real prueba de fuego para ver si hay o no un cambio de rumbo en la dirección de CC.OO. Se anuncian movilizaciones en las próximas semanas: sean bienvenidas; sin duda toda la izquierda sindical, todos los revolucionarios participaremos en ellas, a fondo. Pero hay pruebas más difíciles y más necesarias: por ejemplo, la solidaridad con Sagunto, el plan de lucha para derrotar la política de reconversión, el Libro Blanco. Hasta ahora, fuera del País Valencià, CC.OO. no ha hecho ni la milésima parte de lo que sería necesario y posible hacer, si se quiere de verdad poner una barrera a la desastrosa política del gobierno.

Y si esto ocurre hoy, ¿por qué debemos creer que mañana CC.OO. tendrá una posición fuerte y solidaria —de solidaridad de clase, claro— en la reestructuración de construcción naval, que nos amenaza en el futuro inmediato? Por qué tendríamos que esperar que CC.OO. se niegue a firmar un nuevo pacto social que ya se está cocinando?

Hay ciertamente un espacio para un sindicato de lucha y movilización. No es fácil ocuparlo después de 6 años de destrozos en la conciencia y en la organización obrera. Pero ese tiene que ser el lugar de CC.OO. Sólo puede llevarla hacia allí la izquierda sindical.

Un reto a la izquierda sindical

La situación plantea pues un reto a la izquierda sindical, a todos los sectores combativos, clasistas del movimiento obrero. Y especialmente, hay que decirlo, a los militantes de CC.OO., por una razón: inevitablemente CC.OO. sigue apareciendo entre millares de trabajadores de todo el Estado como la posibilidad actual de ofrecer una respuesta general a la política económica y social del gobierno del PSOE.

El reto consiste en defender y fortalecer una alternativa de lucha, de resistencia, que se oponga con uñas y dientes a que sigan siendo los trabajadores los que paguen la crisis.

Esta es una tarea extremadamente difícil, ante la cual hay obstáculos poderosísimos y que sabemos que no podrá resolverse a corto plazo. Pero sabemos también que puede resolverse, que tiene solución.

No son buenas las condiciones de partida. El movimiento obrero sigue estando débil, en su organización y en su conciencia. Está intoxicado por años de pacto social, por la insolidaridad de clase que han destilado las burocracias sindicales en nombre del "consenso". Ha perdido, en su mayor

parte, confianza en sus propias fuerzas. La mayoría de los trabajadores no creen que ahora sea verdad ese lema decisivo para el movimiento obrero: "sólo la lucha paga".

El 28-O se produjo una reanimación real y desde entonces han tenido lugar muchas de las movilizaciones obreras más importantes de los últimos años. Pero cuando un gobierno de izquierdas asume el papel protagonista de las agresiones contra la clase obrera, se crean nuevas y muy graves dificultades para luchar. El gobierno cuenta con apoyos reales entre los trabajadores, gente que mantiene una confianza, más o menos resignada, en él, o que, en todo caso, lo considera el "mal menor". Además, en el gobierno, y desde luego en sus colaboradores directos del aparato de UGT, hay gente que conoce bien al movimiento obrero y así cada acción está precedida de la adecuada campaña de propaganda, sin dudar en recurrir a los métodos más sucios (p. ej. ahora antes de intentar una reducción salarial brutal en RENFE, se ha iniciado una campaña presentando a los trabajadores como privilegiados improductivos, que transmiten sus privilegios a sus hijos, reservando para ellos los nuevos puestos de trabajo).

Pero sobre todo, la política económica del gobierno socialista plantea un problema general, en todos los sectores de todo el Estado, al cual **hay que ir buscando una alternativa práctica general**. Y la izquierda sindical tiene una realidad muy diversa, con pocas, aunque valiosas, experiencias de trabajo en común.

Sería absurdo quemar etapas, pretender saltar por encima de realidades experiencias e ideas diversas. Pero sí debemos conocer, valorar lo que **tenemos en común**, ciertas señas de identidad que compartimos y que pueden permitir avanzar en la unidad de acción, en campañas, cortejos unitarios en manifestaciones..., actividades quizás modestas todavía, pero en las que vaya tomando forma ante los trabajadores una alternativa a todo lo que representan las direcciones de CC.OO. y UGT.

Para la LCR esta es una tarea de la máxima importancia, a la que vamos a dedicar ahora un esfuerzo mayor aún que en el pasado. No lo haremos solamente por voluntad unitaria. Lo vamos a hacer **por necesidad**. Para decir **¡BASTA!**

Porque es necesario decir ¡BASTA! a la política antiobrera del gobierno y hay que montar una red de resistencia cuanto antes, al menos en los cuatro terrenos siguientes:

Para poner fin este año librnos de la losa de otro pacto social, sea modelo AI o ANE, para un año o para tres años. Esta vez, **CC.OO. ni siquiera debe sentarse en la mesa de negociaciones**. El problema no es "autoexcluirse" como anda ya diciendo algún burócrata demagogo. El problema es que en cualquiera de los modelos de pactos que se avecinan **está excluida** completamente toda posibilidad de defender el poder adquisitivo de los salarios, conseguir medidas efectivas de creación de empleo, mejorar

las condiciones de trabajo, en particular la reducción de jornada, etc., etc. Y por tanto, un sindicato que quiera defender los intereses de los trabajadores no tiene nada que hacer en la mesa de negociaciones. Donde tendrá mucho que hacer es en la preparación de la libre negociación de convenios, para la cual hay que recuperar costumbres muy valiosas, olvidadas por muchos, de negociación colectiva dura, combativa, buscando la unidad de la fábrica y el sector en la lucha misma, buscando la solidaridad cada día, saliendo a la calle cada vez que haga falta...

Para defender el poder adquisitivo de los salarios. Lo que significa en primer lugar ROMPER EL 6,5. Ese tope vergonzoso hay que tirarlo a la basura, ayudando a los compañeros del sector público a quitárselo de encima y negándose a aceptarlo en cualquier otro sector. Pero más allá, hay que repetir que sólo se defiende el poder adquisitivo con aumentos de salarios equivalentes a la subida del IPC del año anterior, que no será menos del 12 por ciento. No puede haber medias tintas: **por debajo del 12% se pierde capacidad adquisitiva por septimo año consecutivo, sin que eso sirva, como prueban los hechos para crear un solo empleo.** Y si el 12% debe valer para todos los asalariados, más aún para el salario mínimo y para todas las pensiones: estos son derechos sociales que exigen un nivel de dignidad, y por ello mismo las pensiones más bajas y el SMI requieren aumentos por encima del coste de la vida.

Para defender la estabilidad en el empleo, ya suficientemente amenazada por las leyes existentes como para que encima se pretenda generalizar el contrato temporal, dar mayores facilidades aún para el despido, etc. **LAS REFORMAS DE ALMUNIA NO PUEDEN PASAR;** hay que prepararse desde ahora no para negociarlas, para conseguir un "mal menor", que seguiría siendo catastrófico, sino para derrotarla. En general, en todo lo que se refiere al empleo y al paro, hay que construir una muralla que no deje resquicio a los proyectos reaccionarios gubernamentales. Hay que seguir luchando por la reducción de jornada, por las 35 horas, que es la jornada coherente con cualquier plan serio de lucha contra el paro. Hay que exigir que se cumpla la promesa de la jubilación a los 64 años; pero esto también sería solo un primer paso si se quiere forjar también aquí una herramienta contra el paro, el objetivo tiene que ser la jubilación a los 60 años. Y no puede aceptarse que se plantee como programa máximo para 1986 una cobertura del desempleo que no llegaría a la mitad de los parados y con subsidios de miseria; el objetivo tiene que ser la generalización del seguro o subsidio de desempleo a todos los desempleados y desempleadas y en una cantidad de dinero digna. En fin, no olvidamos las promesas, ni menos aún la necesidad, de crear empleos, pero ya está completamente claro que el único camino para hacer es por medio del sector público. Lo que se puede conseguir de la burguesía para combatir el paro es **dinero no empleos.** Eso necesita una reforma fiscal cuyos objetivos sean financiar la salida a la crisis

que los trabajadores necesitan.

Y para seguir el ejemplo y llenar de solidaridad a los compañeros de Sagunto en la oposición radical a los proyectos de reconversión industrial del gobierno. Porque no podemos aceptar una reconversión que se construye sobre decenas de millares de puestos de trabajo perdidos y respondiendo a los intereses del gran capital y del imperialismo en cada sector. Cualquier plan de reconversión aceptable para los trabajadores tiene que partir del **mantenimiento del empleo neto en términos actuales**, no en forma de promesas de ninguna clase. Y puesto que en los planes se van a invertir cantidades inmensas de dinero público, deben estar al servicio público, lo que exige **la nacionalización de los sectores afectados**; sin esta condición no habría además ninguna garantía seria de mantenimiento del empleo. Pero más aún que los objetivos alternativos a los del gobierno, importa la movilización solidaria. A pesar de la especial arrogancia del gobierno en este tema, hay en los sectores concentraciones obreras fuertes y experimentadas: si se las consigue unir y se les da la solidaridad suficiente, podremos conseguir echar el Libro Blanco dentro de un Alto Horno.

Más allá de la resistencia

Estas son sólo trincheras de resistencia inmediata, pero hay muchas y muy importantes tareas más allá, o que servirán para fortalecer la resistencia misma. Porque además de decir ¡BASTA!, de frenar los planes del gobierno, hay una lógica muy firme en esa realidad que dice: **"GOBIERNO SOCIALISTA, POLITICA CAPITALISTA"**. Tenemos un gobierno elegido por los trabajadores, pero que gobierna al servicio de los capitalistas. Y lo que queremos es un gobierno que **gubierne contra los capitalistas**. Y esto supone, para empezar, levantar objetivos generales que expresen esta exigencia, ir ganando apoyo para ellos, aunque de momento parezcan lejanos. Los jornaleros de Andalucía nos han dado el ejemplo de cómo se puede llegar a encarnar en un pueblo un objetivo que muchos consideraban "una reliquia del pasado" hace bien poco tiempo: la Reforma Agraria. Hay otros como éste, necesarios aunque todavía minoritarios, que harán su camino si luchamos desde ahora por ellos: la nacionalización de la banca, la lucha contra los presupuestos militares, la oposición a la entrada en el Mercado Común Europeo...

Y todos estos objetivos **empiezan a entrar** en una lógica completamente opuesta claro a la del gobierno del PSOE, pero también a la de cualquier organización de la izquierda reformista, a todos los que quieren utilizar la crisis para "reformular", "humanizar", "democratizar", "hacer evolucionar"..., las palabras son las de menos (y todas significan lo mismo de poco), el ca-

pitalismo. Nuestra conclusión, es la opuesta: la crisis ha dado otra prueba de la incapacidad del capitalismo para resolver hasta los problemas materiales más elementales de la humanidad. Nosotros tratamos de ganar fuerzas para destruirlo.

Algún personaje montado en la apisonadora socialista ha dicho que no queda en el Estado español "espacio social" para una alternativa revolucionaria. Para eso sería necesario que la "apisonadora" aplastara toda la capacidad de rebelión que hay en nuestra sociedad. No creemos que lo consiga. Luchamos para que no lo consiga. Por un comunismo que sea capaz de dar expresión política a toda esa rebeldía que crece, entre la decepción y la rabia por la experiencia del "cambio".

HACE un año, "cambio" significó para millones de hombres y mujeres de todo el Estado español, la esperanza de empezar a combatir el paro, de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, asegurar las libertades, salir de la OTAN...: estas ilusiones dieron una victoria electoral aplastante al PSOE. Pero enseguida pudo comprobarse que "cambio" significaba algo muy diferente para el gobierno socialista. El objetivo fundamental que se dió desde el primer día el gobierno de Felipe González fue modernizar el capitalismo español: dicho más precisamente, ayudar a la burguesía española a resolver sus problemas básicos, económicos y políticos: desde la reestructuración industrial a la reforma de la Seguridad Social; desde las contradicciones entre el aparato militar y las instituciones parlamentarias a la debilidad de la centralización política del Estado; desde la entrada en el Mercado Común Europeo a la integración en el dispositivo militar imperialista.

